



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-016-2021-00238-01 (O2-23-030)
Demandante: SULMA MAYRENA RAMIREZ CARMONA
Demandado: COLPENSIONES.
Procedencia: JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No 175
Asunto: PENSIÓN DE INVALIDEZ

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **SULMA MAYRENA RAMIREZ CARMONA** en contra de **COLPENSIONES**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-016-2021-00238-01 (O2-23-030).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. Mediante poderhabiente judicial la señora SULMA MAYRENA RAMIREZ CARMONA persigue que se deje sin efectos el dictamen DML4252856 emitido por COLPENSIONES, mediante la cual se estableció una PCL del 26.42% de origen común y con fecha de estructuración del 04 de mayo de 2021; que se declare que presenta una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% de origen común, en consecuencia, que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez, el retroactivo pensional, los intereses moratorios, la indexación, lo ultra y extra petita, y las costas procesales.

Fundó sus pretensiones en que nació el 22 de enero de 1974, encontrándose afiliada a Colpensiones; que debido a sus quebrantos de salud fue calificado por Colpensiones el 05 de

mayo de 2021, con una PCL del 26.42%, de origen común y con fecha de estructuración del 04 de mayo de 2021; que el dictamen no tiene en cuenta todas las patologías ni la gravedad de las mismas, como lo son el dolor crónico muscular, dolores en los brazos y el amplio manejo por parte del Instituto Colombiano del Dolor. (Fols. 1 a 04 archivo No 03).

1.2 Trámite de primera instancia y contestación de la demanda. La demanda fue admitida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 24 de agosto de 2021 (fl. 1 a 2 archivo No 05), ordenando su notificación y traslado a la accionada **COLPENSIONES**, quien contestó la demanda el 31 de agosto de 2022 (Fls. 2 a 9 archivo No 15), oponiéndose a las pretensiones enarboladas, con fundamento en que el demandante no cumple los requisitos para obtener la pensión de invalidez, esto es, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral requerido. Como excepciones de mérito formuló las de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez, prescripción, buena fe, compensación, imposibilidad de condena en costas, inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios, y la innominada o genérica.

1.3 Decisión de primer grado. El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 25 de enero de 2023 (Fls. 1 a 3 archivo No 21 y audiencia virtual archivo No 20), con la que el cognoscente de instancia negó las pretensiones incoadas por la parte demandante en contra de Colpensiones; declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, y finalmente, condenó en costas a la demandante.

Partió el cognoscente de instancia de la formulación del problema jurídico por resolver, el cual lo hizo consistir en determinar si le asiste derecho a la pensión de invalidez.

Consideró que de conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 el estado de invalidez exige que la persona tenga el 50% o más de pérdida de capacidad laboral, siendo que en el presente proceso sólo se cuenta con el dictamen de Colpensiones, en el que fue calificada con una PCL del 26.42% de origen común y con fecha de estructuración del 04 de mayo de 2021, es decir, con un porcentaje inferior al exigido por la norma.

Precisó que no podía tenerse en cuenta el dictamen que fue aportado en el transcurso del proceso, dado que no fue aportado en la oportunidad legal como lo exige el artículo 227 del CGP.

Ello así, consideró que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba, debiéndose absolver de las pretensiones incoadas en la demanda, ello sin perjuicio de que pueda volver a

calificarse su estado de invalidez. Finalmente, impuso costas procesales a la parte demandante.

1.4 Apelación. La parte demandante presenta recurso de apelación con fundamento en que no se debe condenar en costas, en atención a que se allegó una solicitud de amparo de pobreza donde se manifiesta su situación económica, por ende, peticiona que se revoquen las costas impuestas en primera instancia.

1.5 Trámite de Segunda Instancia. El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 13 de febrero de 2023 (carp. 02, doc. 02), y mediante auto del 28 de febrero de 2023 (carp. 02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso, siendo que oportunamente Colpensiones presentó alegaciones solicitando que se confirme la decisión de instancia al no acreditar la parte actora el porcentaje del 50% de PCL; en tanto que la parte demandante en las alegaciones solicita que se revoque parcialmente la decisión en lo que concita a la condena en costas impuestas a la parte demandante.

2. ANALISIS DE LA SALA

2.1 Apelación sentencia, y principio de consonancia. Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, al igual que se estudiará la providencia en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte actor, ya que la decisión fue totalmente desfavorable a sus intereses en lo que respecta a la pensión de invalidez, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.2 Problema Jurídico. El tema decidendi en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar: **i)** ¿Si se acreditan los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, y de ser así, al retroactivo pensional?, así mismo **ii)** ¿si es procedente la condena en costas?

2.3 Tesis de la sala y solución a los problemas jurídicos planteados. El sentido del fallo de esta Corporación será **CONFIRMATORIO**, en razón a que la parte demandante no acreditó que tuviera una PCL igual o superior al 50% como lo exige el artículo 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993, para hacerse acreedora de la pensión de invalidez pretensa; frente a las costas procesales, las mismas se generaron en contra de la demandante, de conformidad con el

artículo 365 del CGP, sin que pueda tenerse en cuenta el escrito de amparo de pobreza, puesto que el mismo no se resolvió en la primera instancia en la oportunidad procesal, sin que sea la sentencia de primer grado la oportunidad para revivir etapas ya precluidas, indefinición frente a la cual el apoderado judicial guardó silencio.

2.4 Pensión de invalidez- origen común. No es objeto de controversia que la señora SULMA MAYRENA RAMIREZ CARMONA se encuentra afiliada a COLPENSIONES desde el 04 de marzo de 1994, con cotizaciones hasta el 31 de julio de 2022 y con una densidad de 1.156,43 semanas (fols. 421 a 431 archivo No 15); que el 05 de mayo de 2021 fue calificada por COLPENSIONES con una pérdida de capacidad laboral del 26.42 % de origen común y con fecha de estructuración del 04 de mayo de 2021 (fols. 21 a 25 archivo No 03); que el 08 de junio de 2021 presentó la reclamación administrativa pretendiendo la pensión de invalidez ante Colpensiones (fols. 86 a 88 archivo No 03).

En lo que respecta a este tópico, conviene colacionar el contenido en el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, y del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, vale decir, la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguros que asuma lo riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, procediere a presentar reproche frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; siendo del caso aclarar por la Sala que, en últimas, las controversias que se susciten en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).*

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el aludido dictamen “...no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622

del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); precedente judicial en el que además se reiteró que *“...al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”*; precisando en las sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, *“...si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”*. -Negritas intencionales de la Sala-

De igual forma, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica e iterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto *“Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías”* (SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juzgador *“... debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo* (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).

De igual manera, debe tenerse en cuenta las previsiones legales contenidas en el Artículo 241 del C.P.C, y trasuntas en el artículo 232 del C.G.P, según las cuales el juez: *“apreciará el*

dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

Los anteriores basamentos jurídicos y jurisprudenciales sirvan para educir por la Sala que, la conclusión del cognoscente de instancia se considera acertada, en cuanto que ciertamente el único dictamen arrimado al proceso fue el del 05 de mayo de 2021, en el que COLPENSIONES la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 26.42 % de origen común y con fecha de estructuración del 04 de mayo de 2021 (fols. 21 a 25 archivo No 03), porcentaje inferior al que establece el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, esto es, que se considera que una persona tiene condición de invalidez cuando alcanza o supera el 50% de PCL.

Ahora, ciertamente el artículo 227 del CGP establece que “la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas”, lo cual en el proceso laboral debe hacerlo el demandante con la presentación de la demanda (Numeral 9 artículo 25 del CPTSS), sin que el extremo litigioso por activa haya efectuado tal actuación en dicha oportunidad procesal. Además, nótese que en la etapa de decreto y práctica de pruebas, guardó total hermetismo el apoderado judicial de la activa, sin insistir o pedir la realización de un dictamen pericial que diera lugar a definir la PCL de la actora, incluso, a pesar de que en el transcurso del proceso aportó un dictamen del 12 de septiembre de 2022 (Fol. 3 a 9 archivo No 18) de la Junta Médico Laboral, IPS de Calificación y Reintegro Laboral, el a quo optó por no incluir tal dictamen como medio probatorio al proceso, y el apoderado judicial guardó silencio frente a tal negativa, razón por demás para concluir que en efecto tal dictamen de ninguna manera puede ser valorado en esta instancia, pues no sólo no se incorporó con la presentación de la demanda, sino que fue negada su incorporación y nada se dijo, y en esa medida, mal haría esta judicatura en revivir etapas procesales precluidas.

Así las cosas, trayendo a colación el postulado “*onus probandi*”, “*incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*” (art.167 C.G.P antes 177 C.P.C), lo que quiere significar que no basta con afirmar, sino que es necesario acreditar o demostrar los hechos que sirven de sustento a la demanda incoada; de donde se infiere que la parte actora no cumplió con la carga probatoria de sacar adelante sus pretensiones, y por esa vía, ni siquiera se abriría camino a una eventual prueba oficiosa de parte de esta judicatura al tenor de lo establecido en el artículo 83 del CPT y la SS.

Finalmente, lo anterior no es óbice para que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, adelante ante las entidades de seguridad social competentes nuevamente una calificación que determine bajo el concepto de calificación integral su estado de invalidez, pues

no puede desconocerse que *“Para tal efecto, el legislador ha estructurado un trámite destinado a establecer el estado de invalidez que, en plena garantía del derecho constitucional al debido proceso, permite resolver, de manera definitiva, el porcentaje global de pérdida de capacidad laboral, el origen de dicha contingencia y la fecha de su estructuración”* (T-427 de 2018).

Colofón de lo expuesto, no queda camino diferente al de confirmar la decisión de instancia, la que con acierto negó las pretensiones incoadas por la actora, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación.

3. Costas. En segunda instancia no se impondrá condena en costas, por no haberse causado, además de que el reconocimiento de la pensión de invalidez pretense se revisó en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante. Las de primera instancia se confirman, dado que de conformidad con el artículo 365, numeral 1° del CGP, la parte demandante fue vencida en el proceso. En lo que respecta al monto de las costas, debe decirse que según lo dispone el numeral 5° del artículo 366 *ejusdem*, no es esta la oportunidad procesal para controvertir su monto. Debe precisarse que en lo que respecta con la solicitud de amparo de pobreza a la que hace relación la demandante, ciertamente con la demanda (Fol. 89 archivo No 03), se hizo una solicitud de amparo de pobreza, pero la misma no fue resuelta con el auto admisorio de la demanda conforme lo establece el artículo 153 del CGP, ni tampoco en oportunidad posterior, sin que el apoderado judicial haya puesto en evidencia del despacho tal situación, por lo que, no puede constituir el recurso de apelación de la sentencia la oportunidad procesal para ello, mucho menos, darle los efectos de que trata el artículo 154 *Ibidem* sólo con la simple radicación de la solicitud de amparo de pobreza.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.: CONFIRMAR la sentencia materia de apelación y consulta, proferida el 25 de enero de 2023, por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL 2550 de fecha 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

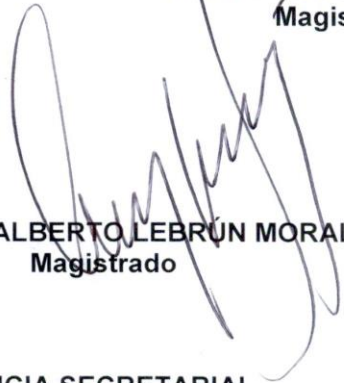
Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



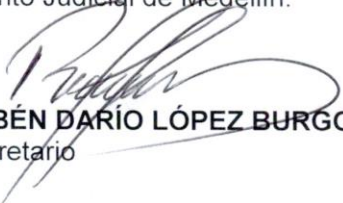
CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario